



## OFICIO

S/REF.: Expediente nº 00001-00082896

FECHA: 25 de octubre de 2023

ASUNTO: Incidentes afición holandesa.

### DESTINATARIO:

El día 16 de octubre de 2023 tuvo entrada en esta Dirección General solicitud de información efectuada por a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

- Los procedimientos penales abiertos a los holandeses detenidos.
- Si se les intervino objetos violentos.
- Informes de la Policía sobre la peligrosidad del evento.
- Número de españoles heridos en los incidentes de la zona Vip, como número del arte de lesionados que requirieron atención sanitaria y de qué alcance.
- La embajada holandesa en España ha informado en su cuenta oficial en twitter <https://twitter.com/NLinSpain/status/1710197566539706406> que durante semanas colaboraron las autoridades holandesas con las españolas para que no hubiera incidentes. Requiero detalle de esas colaboraciones e informes recibidos de la Policía holandesa sobre la violencia de los hinchas del Feyenoord.
- Informe de policía sobre lo sucedido en el palco Vip del Atlético de Madrid, y aclaración de los menores que se vieron dañados por la violencia holandesa.
- Aclaración sobre si la Delegación del Gobierno en Madrid conocía o no de la peligrosidad de esa hinchada holandesa y sobre si sabía o no que hay ciudades como Roma donde se les tiene prohibido ir porque la destrozaron en 2015.
- Detalle de los incidentes causados por los holandeses en los días previos y posteriores al partido en la ciudad de Madrid."

Una vez analizada la petición este Centro Directivo considera que las preguntas formuladas se pueden agrupar en: aquellas relativas a hechos que tuvieron lugar con anterioridad, o con posterioridad, a la celebración del partido:

- Informes de la Policía sobre la peligrosidad del evento.
- La embajada holandesa en España ha informado en su cuenta oficial en twitter <https://twitter.com/NLinSpain/status/1710197566539706406> que durante semanas colaboraron las autoridades holandesas con las españolas para que no hubiera incidentes. Requiero detalle de esas colaboraciones e informes recibidos de la Policía holandesa sobre la violencia de los hinchas del Feyenoord.
- Detalle de los incidentes causados por los holandeses en los días previos y posteriores al partido en la ciudad de Madrid

Y el resto de las cuestiones que hacen referencia a los hechos ocurridos en el palco del Estadio de Fútbol Metropolitano.

En lo que respecta a las relacionadas con **hechos anteriores y posteriores** a la celebración del encuentro, una vez analizadas, este Centro Directivo informa de

que existe un **límite** en el acceso a la información solicitada en base a los **artículos 14.1 e) y j)** de la Ley 19/2013, 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece que *"el derecho de acceso puede ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:*

*e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.*

*j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial"*

En relación a lo anterior, y en concreto sobre el Artículo **14.1. e)** en cuanto a las investigaciones llevadas a cabo por esta Institución, referir que el artículo **104.1 de la Constitución** establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, para cuyo cumplimiento deben actuar con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento, tal como recoge el mandato constitucional en su artículo 9.1 y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5.1.

La prevención de actos delictivos, la investigación de los ilícitos penales y la protección de las personas que se encuentren en situación de peligro, lleva a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al empleo de procedimientos, técnicas y protocolos de actuación donde se combinan medios humanos y materiales, que quedan plasmados en numerosos informes policiales que forman parte de la esfera de **información sensible y no pública** para el buen desempeño de las funciones encomendadas.

Estos informes policiales forman parte de procedimientos judiciales, motivo por el cual se considera que el acceso a su contenido constituiría un perjuicio para las funciones legalmente encomendadas de investigaciones y esclarecimiento de los hechos así como para la adecuada tramitación de los expedientes sancionadores.

Así mismo, según la **Ley orgánica 2/1986**, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su **Artículo 5** que son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes:

*"(...) **5. Secreto profesional.** Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de Información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera",* motivo por el cual es de aplicación igualmente el Artículo **14.1.j)** de la Ley de Transparencia mencionado inicialmente.

Por otro lado, y en relación a aquellas preguntas sobre los **hechos acaecidos en el palco**, este Centro Directivo, no puede facilitarse la misma al ser de aplicación el **punto dos de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG**, según el cual *"se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información".*



La información solicitada forma parte de un Atestado Policial el cual es remitido en su conjunto a la Autoridad Judicial competente, formando parte a su vez de actuaciones judiciales sobre las que el Ministerio del Interior no puede disponer, sino que quien desee acceder a ella debe someterse al régimen contenido en las normas que regulan el modo y condiciones de acceso a la información contenida en las actuaciones judiciales, cuya aplicación prevalece sobre cualquier otra norma, en este caso la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

Cabe reseñar que los atestados policiales no son meros informes o anexos que se adjuntan a la causa judicial, sino que pueden tener también la **virtualidad probatoria propia** cuando contiene datos objetivos y verificables, que expuestos por los agentes con su firma y rúbrica y con las demás formalidades exigidas por los arts. 292 y 293 LECrim han de ser calificados como declaraciones testificales, siendo la esencia de la instrucción de procedimiento penal, la cual continente denuncias, objetos de prueba, pruebas anticipadas e indicios conformadores en su momento de auténticas pruebas y por lo tanto no es un documento que deba ser catalogado como público, y mucho menos cuando este es remitido a la Autoridad Judicial, que es la competente para el total esclarecimientos de los hechos y quien igualmente determina el secreto o no de las actuaciones.

Así, la **Sentencia nº 61/2020, dictada por el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 11, procedimiento ordinario 116/2019**, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo promovido contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –CTBG- de 30/07/2019, con referencia R/0308/2019, sostiene que los atestados policiales pierden la naturaleza puramente administrativa que podría tener un informe elaborado en un Ministerio, pues al formar parte de las actuaciones judiciales cuya comisión se investiga y, eventualmente se enjuicia, pasan a formar parte del expediente judicial y, por ello, la autoridad competente para otorgar o no el acceso a los mismos es la judicial, por cuanto constituyen parte de la documental obrante en el procedimiento, al igual que un informe pericial, o cualquier otro documento.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**

**Francisco Pardo Piqueras**

